



Iconos. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249

revistaiconos@flacso.org.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

Santana Rodríguez, Pedro

La crisis política en Colombia

Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 12, noviembre, 2001, pp. 47-53

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50901205>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org



Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La crisis política en Colombia

Pedro Santana Rodríguez*

Desde el punto de vista formal, las instituciones políticas colombianas son de las más estables de la región. En los últimos ciento cincuenta años ha habido sólo un golpe militar o “golpe de opinión”, como eufemísticamente se lo llama en los círculos dominantes, que fue el propiciado por Gustavo Rojas Pinilla en los años cincuenta del siglo XX. Este fue un golpe de corta duración, propiciado para salir de la guerra civil del medio siglo en que los partidos tradicionales -liberal y conservador- se habían trenzado: una aguda confronta-

to que se denominó este acuerdo, los ron el poder del un término de di gado y en la prá cho años. Por me beral y conserva to antidemocráti bernal y de ocup se el presupuest rísticas más estru tico que, en térmi nes al conjunto general y a la reg

conceptos y mucho menos sus prácticas. En Colombia, por ejemplo, la esclavitud de la población negra se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Pero además nuestras revoluciones de independencia se detuvieron apenas en la separación de España o Portugal, y no trascendieron a la realización de una reforma social y económica.

Así, desde el comienzo de su existencia, en estas nuevas formas de organización política encarnaron, en su propia estructura, rasgos que permanecen como realidades anacrónicas -que hay que remover para avanzar en el proceso de desarrollo de nuestros países-. Las élites empotradas en esas instituciones políticas lo han utilizado para su beneficio tanto en Colombia como en Brasil, Argentina, Ecuador o Venezuela. Diversos estudios realizados globalmente sobre la región latinoamericana y del Caribe insisten en que el problema de la gobernabilidad democrática en la región está fundado en la contradicción paradójica que se establece al tratar de mantener un orden jurídico y político basado en la igualdad básica entre los ciudadanos y, al mismo tiempo, preservar el mayor nivel mundial de desigualdad en el acceso a la distribución de la riqueza y de los bienes públicos¹. Los propios organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, lo han señalado. En efecto, según el informe “La Hora de la Reforma”



La crisis colombiana tiene alternativas. La requiere negociación con las guerrillas y de reformas políticas, económicas y sociales. La la derrota militar de las guerrillas y el hundir en una confrontación generalizada

mocrático supone no solo el respeto de los derechos humanos sino la existencia de libertades públicas, elecciones periódicas basadas en reglas preexistentes, alternativas del poder en disputa, garantías a la oposición, así como la existencia de medios de comunicación independientes. Recientemente, con la fragilidad de las reglas del juego y con la inexistencia -o en todo caso con la limitación- de la separación real de poderes, se han transformado los acuerdos y leyes electorales para permitir la reelección por más de un período a varios presidentes en ejercicio y se han acentuado los poderes del presidencialismo asfixiante que se vive en la región. Todo ello se manifiesta con un marcado predominio del poder ejecutivo en desmedro de las demás ramas del poder público. Los sistemas de rendición de cuentas a la sociedad son muy débiles.

Los sectores campesinos durante el período de la paz fueron incorporados a la vindicación, una reivindicación que redundó. La apertura a la diversidad pluralista de las fuerzas armadas del poder ha marchado, en su mayoría, de vuelta a un lejano pasado. La derrota de las guerrillas revolucionarias de la década de los setenta y los ochenta de entonces no ha

El monopolio del Estado, con base en el control del poder civil, siempre con excepciones notables, es un factor territorial. Como control territorial del Estado en materia de economía y política, las guerrillas

.....

los narcotraficantes convertidos también en nuevos terratenientes, se dieron a la tarea de organizar grupos de defensa privados. Estos grupos fueron tolerados cuando no abiertamente apoyados por autoridades militares y de policía. Nacieron así los llamados “grupos paramilitares”. Estos comenzaron una labor de “limpieza social” asesinando campesinos, indígenas, dirigentes sociales, activistas de derechos humanos y, en general, ciudadanos desarmados de quienes los grupos paramilitares sospechaban que tenían nexos o favorecían las acciones de las guerrillas. Estos grupos son hoy los responsables del 75% de los asesinatos políticos y actúan en el marco de una amplia impunidad. Su crecimiento no solo se debe al respaldo de los terratenientes, sino también al financiamiento que proviene del narcotráfico, su principal fuente de ingresos, y al respaldo, denunciado en no pocas ocasiones por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de sectores de las fuerzas militares.

En amplias zonas del territorio las instituciones del Estado han colapsado o tienen poderes muy limitados. Las guerrillas y los paramilitares controlan territorialmente a los actores sociales y a las autoridades políticas. Los alcaldes y los concejos municipales se ven precisados a gobernar según los designios de los actores armados. Algunos

El resultado del conjunto de las reformas en materia política es contradictorio. Por una parte, se ha avanzado en la pluralización de la sociedad política sobre todo en el ámbito de los gobiernos municipales y departamentales, toda vez que sectores nuevos e independientes han llegado a alcaldías y gobernaciones, sin afectar de manera significativa la representación en el Congreso de la República que sigue estando principalmente en manos de los sectores tradicionales muy ligados al poder terrateniente y dóciles frente al ejecutivo presidencialista y a los grandes conglomerados económicos y financieros. Pero, al mismo tiempo, profundizó la fragmentación política provocando una profunda crisis de representación al flexibilizar al extremo la posibilidad para formar partidos políticos sin mayores requisitos.

Lejos de detenerse, la crisis de la política se ha profundizado con el derrumbe parcial del Estado. Varios factores han influido de manera determinante para que se profundice la crisis de representación y de legitimidad política y para que el nuevo orden constitucional nacido en 1991 no haya podido desplegar su potencial de cambio y transformación de la realidad política.

El primer factor lo constituyó la incapacidad para vincular al proceso constituyente a las guerri-

traba el Secretariado, ces las FARC y el Comité Central del ordenamiento.

Un segundo factor es la fragmentación de los partidos políticos y la debilidad del amplio sector de la población que no está ligado al narcotráfico. Este sector es el que ha financiado el desarrollo de la Presidencia de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, el proceso que terminó con la muerte de 100 militares y civiles, y que ha dejado a miles de personas sin trabajo y sin vivienda. Los nexos comprobados entre la élite política y la población se mantienen fuertes, ya que esa clase política mantiene una relación de amistad con los grupos armados y financieros, como los "cacaos" y los "cañeros".

82% del total de los casos de corrupción en Colombia se han vinculado con el favorecimiento a los grandes conglomerados y con la nula reivindicación de las demandas en el terreno social. Los sectores populares, que representan el 70% de la población, siguen siendo marginados y discriminados por la élite política y económica.

la Corte Constitucional, buena parte de la impunidad en que se mantienen las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, tiene su sustento en este vacío constitucional. En una escalada del conflicto, como la que se presenta en Colombia, el poder de las Fuerza Armadas se incrementa y los nexos -muchas veces comprobados y denunciados otras tantas- entre éstas fuerzas y los paramilitares los cubre el denso manto de la impunidad.

Al mismo tiempo, la crisis de los partidos y movimientos políticos se profundiza y amenaza seriamente con lo que queda de la estabilidad institucional en su conjunto. Entre los estudiosos de dicha crisis hay un amplio consenso sobre los principales factores que la conforman. Primero, esta crisis la podemos relacionar con la ausencia de programas y de debates programáticos frente a los principales problemas del país, lo cual ha dado como resultado una indiferenciación ideológica y un vacío en la formulación de propuestas políticas serias en relación con temas como el empleo y el manejo de la política macroeconómica -presa de una Junta Directiva del Banco de la República que mantiene políticas ortodoxas monetaristas y neoliberales insensibles a los problemas de la exclusión y de la pobreza-. Ha habido, como en otros países de América Latina, cambios en los

acuerdos básicos -de Estado- para negociar con las guerrillas, los ajustes y cambios profundos que requiere el modelo de globalización especulativo, la atención adecuada a los cientos de miles de desplazados como consecuencia de la agudización del conflicto armado y una estrategia andina para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Estos son apenas algunos de los principales problemas de la agenda urgente para no hablar de las políticas más duras de generación de empleo e ingresos para los 26 millones de pobres que nos han dejado tanto los neoliberales como los partidos tradicionales o la renegociación de la deuda interna y externa para afrontar el déficit fiscal.

La reforma política que requiere el país debe llevar a la refundación de las colectividades políticas mediante el recurso a los militantes, a las bases, a la sociedad, para refundar la propia representación y delegación de los ciudadanos en sus representantes. Para ello se requieren ciertamente leyes, pero antes que nada se requiere recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y su confianza en los proyectos y en los sueños de un país con equidad y en paz.

sectores del campo que venir un pro con una guerrilla vía es nefasta para destrucción de u nes públicos co historia.

Como bien lo reciente ensayo "Una ma con un vocalidad de Colombia del colapso de un pone nada, y de condiciones de g nios a la altura de mos ser. Esto no ra. Pero yo quiero más cerca de lo q formación de sí n nuestro destino guerra, pero la v na le conviene a como lentamente paz, la negociació revela que algo en su única posibil histórica está en Estado, que lo re